

Camps y Alarte preparan ofensivas políticas en defensa del Tajo-Segura

El jefe del Consell amenaza con una rebelión de sus diputados y el líder del PSPV recurrirá al Constitucional si hay una fecha de caducidad en el estatuto manchego

VOTE ESTA NOTICIA ★★★★★



P. ROSTOLL Por separado pero con el mismo objetivo. Tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, trabajan con la hipótesis de tener que plantar cara a Madrid para defender la vigencia del Tajo-Segura durante la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha. No han hablado sobre el tema -ni siquiera se han reunido oficialmente- pero tanto populares como socialistas verán como se unen sus caminos si, finalmente, el documento que promueven el presidente manchego José María Barreda y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, incluye la referencia a la supresión de la conducción en 2015.

Las primeras negociaciones de populares y socialistas en el Congreso apuntan a la posibilidad de mantener la fecha de caducidad del trasvase dentro de seis años aunque rebajando su valor jurídico y dejándolo como una "recomendación". Pero Camps lo tiene claro. La defensa del Tajo-Segura -como también del trasvase del Ebro- es una de las piedras angulares de su política hídrica. El jefe del Consell está convencido de que, en última instancia, esa alusión desaparecerá del texto. En caso contrario, tiene prácticamente decidido que los diputados del PPCV -un total de 19- tendrán orden estricta de votar en contra el documento, tal y como ya hicieron algunos parlamentarios de la Región de Murcia.

Una división de esas características tendría unas consecuencias impredecibles dentro del PP. De hecho, generaría una confrontación directa entre el presidente de la Generalitat y principal barón territorial de la formación, Francisco Camps, y la número dos de Rajoy, la citada De Cospedal, que mantiene una calculada ambigüedad sobre el Tajo-Segura, una vía fundamental para el abastecimiento de la provincia de Alicante. Y, sin orquestarlo, el jefe del Consell va a coincidir, llegado el caso, con los socialistas en este asunto. Alarte, el nuevo líder del PSPV, también tiene claro qué hacer si Ferraz acaba cediendo a las presiones de Barreda para mantener abierto el debate sobre la caducidad del trasvase.

Jorge Alarte no quiere poner el retrovisor en materia hídrica pero es consciente de que necesita reorientar su discurso sobre el agua para empezar a ofrecer un liderazgo alternativo que tenga cierta credibilidad. "Por encima de todo, los valencianos", esa es la máxima que quiere aplicar Alarte a su proyecto. Y la primera oportunidad que, posiblemente, tendrá el dirigente del puño y la rosa para visualizar ese cambio de rumbo será en el debate abierto sobre el Tajo-Segura. La cúpula del PSPV, en principio, no dará consigna para votar en contra durante la tramitación parlamentaria. No quieren dar imagen de indisciplina. Pero, al menos esa es la decisión en firme que Jorge Alarte tiene tomada, sí se sumarán a un recurso de inconstitucionalidad que pueda promover la administración autonómica contra el Estatuto de Castilla-La Mancha, uno de los grandes feudos del PSOE.

Los socialistas valencianos quieren que desaparezcan referencias que afectan a la Comunidad hasta en catorce apartados del articulado, incluida la alusión a la caducidad del trasvase en 2015. Alarte, de momento, se mantiene a la expectativa -no actuará hasta que no se cierre por completo la tramitación parlamentaria- pero sí que está muy pendiente de todos los movimientos. De hecho, a mediados de septiembre, una vez que trascendió la posibilidad de que se mantuviera la fecha de caducidad del trasvase, el líder del PSPV telefoneó a Ramón Jaúregui, secretario general del grupo parlamentario socialista y uno de los actores principales en las



El trasvase Tajo-Segura a su paso por la localidad de Campos del Río, en una imagen de archivo INFORMACION

negociaciones del Estatuto manchego, para intercambiar impresiones sobre el punto en el que se encontraban los contactos.

Varios aplazamientos en la tramitación

La complejidad de la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha ya ha obligado a la Mesa del Congreso a ampliar los plazos para la tramitación de las enmiendas, un paso previo al debate en comisión y en el pleno que ya tendría que haberse sustanciado. Así las cosas, los grupos parlamentarios retomarán en enero la negociación de las enmiendas. Al llegar el texto con el beneplácito tanto del PSOE como del PP de Castilla-La Mancha, ambas formaciones tienen que consensuar el contenido final de los posibles cambios y lo harán con la misma fórmula que ya utilizaron para el Estatuto valenciano. Pactarán el texto y, con posterioridad, registrarán las enmiendas cada uno por su lado. Esa es la parte clave de la tramitación. Al estar pactadas las enmiendas, es complicado que se acabe modificando cualquier cuestión que no entre dentro del acuerdo global de los dos partidos. Las enmiendas se debatirán, con posterioridad, en la Comisión Constitucional antes de pasar al pleno del Congreso. La negociación tiene la dificultad añadida de que ni el PP ni tampoco Ferraz pueden poner el texto a los pies de los caballos lo que sería tanto como dejar en evidencia a la número dos del PP y fichaje estrella de Rajoy, María Dolores de Cospedal; y a Barreda, responsable del consejo territorial del PSOE.